


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Entidad originadora:	<i>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</i>
Fecha (dd/mm/aa):	<i>27 de agosto de 2024</i>
Proyecto de Resolución:	Por la cual se reglamenta la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera que trata la Ley 2250 de 2022 y se dictan otras disposiciones.

1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN.

A lo largo del territorio colombiano hay distintas regiones en las que se concentran las actividades mineras. Entre estas se destacan los departamentos de la Guajira, el Cesar, Córdoba, Chocó y el Cauca. En el año 2022, el PIB minero ascendió a USD 4333 millones, correspondientes al 1,22% del PIB total, y los departamentos con mayor participación en el PIB minero son La Guajira, Cesar, Chocó, Córdoba y el Cauca.


En materia de titulación minera, según cifras con corte a agosto de 2023, existen aproximadamente 7182 títulos mineros vigentes en Colombia, que corresponden a 2,81 % del territorio nacional. De estos, 5440 se encuentran en etapa de exploración, 1073 en explotación, 287 en construcción y montaje y uno en evaluación técnica anticipada, según cifras de la Agencia Nacional de Minería. Estos títulos se han otorgado a través de diferentes modalidades, principalmente contratos de concesión, autorizaciones temporales, licencias de explotación y contratos en virtud de aportes.

No obstante, la minería a lo largo de la historia de Colombia presenta un escenario complejo frente a realidades y problemáticas como la criminalidad, las cosmovisiones ancestrales y la economía de subsistencia que se desarrolla en gran parte del territorio.

En efecto, un gran porcentaje de la minería que se desarrolla en el país se explota de manera ilícita y no autorizada como lo establece la Ley, sin instrumento de manejo y control ambiental o minero, lo que ha presentado relaciones de causalidad con fenómenos como la erosión del suelo, la liberación de sustancias tóxicas (el cianuro y el mercurio), el manejo inadecuado de fuentes de agua y la producción de polvo y ruido por encima de los niveles permitidos. En el marco de la política minera nacional de 2023 denominada “Una nueva visión de la minería en Colombia”, se identifican diez (10) problemáticas asociadas a la actividad la explotación no autorizada e ilícita de minerales que han incrementado los conflictos territoriales y ha provocado que no se logre realizar la validación eficiente del recaudo de las regalías producto de la explotación y aprovechamiento del recurso ni tampoco que se logre conocer y cuantificar la producción minera proveniente de “actividades no autorizadas” e ilícitas.

Es importante resaltar que se hace necesario distinguir entre la minería “informal” o “de hecho” y la minería “ilegal”. La primera abarca la minería a pequeña escala, generalmente tradicional, artesanal o de subsistencia que se desarrolla en las zonas rurales del país, como una alternativa económica frente a la pobreza y como una forma de obtención de recursos económicos que permite asegurar el mínimo vital de las familias que por tradición se han ocupado del oficio minero como herramienta de trabajo. La segunda se asocia con el patrocinio de actividades ilícitas, como lo son, por ejemplo, los grupos armados ilegales o las bandas criminales, que utilizan este negocio como medio de financiación de sus actividades. Así, las dos formas de minería se diferenciarían, entonces, en virtud de su vocación de legalización. La minería ilícita no tiene la intención de legalizarse, porque la destinación de sus recursos es ilegal; en

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

cambio, los mineros de hecho aspiran a obtener un título que les brinde la posibilidad de ejercer la minería como forma de subsistencia. Y es precisamente frente a la minera informal o de hecho que se hace relevante y necesario el presente instrumento normativo.

En efecto, la pobreza multidimensional abunda entre la población que ejerce la minería artesanal, tradicional y de pequeña escala, y coincide con la ausencia de condiciones efectivas para la formalización y fomento de esas actividades.

El Plan Nacional de Desarrollo Minero de 2012, visión 2014, abordó el concepto de minería artesanal de pequeña escala y determinó su caracterización y formalización. Como resultado, en el 2014 se expidió la Política Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia, donde se estableció que la formalización de la actividad minera no sólo hace referencia a su titularidad sino que también la formalización para la pequeña minería debía enfocarse “en estándares legales, técnicos, ambientales, económicos, sociales y laborales que permiten que la pequeña minería sea una actividad económica legal, viable, rentable, segura, ambientalmente sostenible y que contribuya al desarrollo de las comunidades y sus regiones”.

Con la expedición de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022), se dio un importante impulso a los procesos de formalización minera. Desde entonces un número significativo de mineros y mineras formalizaron sus operaciones a través de diferentes mecanismos jurídicos. El artículo 22 de la referida Ley estableció el instrumento “Licencia Ambiental Temporal para la Formalización Minera” requerido para el trámite de licenciamiento ambiental de los pequeños mineros tradicionales en proceso de formalización y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible su reglamentación, con ocasión de lo cual se expidió la Resolución 448 de 2020 mediante la cual acogió los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para la licencia ambiental temporal y los plazos establecidos por dicha ley.

Tras haber sido adoptado por parte del Ministerio de Minas y Energía los Lineamientos de Formalización para el Fomento Minero mediante la Resolución 40195 de 2021, el 11 de julio de 2022, el Congreso de la República expide un nuevo régimen especial de formalización y legalización para las poblaciones mineras de pequeña escala que han desarrollado su actividad sin el cumplimiento de los requisitos legales. Así, mediante la Ley 2250 de 2022, “Por medio de la cual se establece un marco jurídico especial en materia de Legalización y Formalización Minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una normatividad especial en materia ambiental” estableció la figura de la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera y establece la competencia de este Ministerio para reglamentar el referido instrumento de control ambiental, tomando como base el enfoque diferenciado, la simplificación de trámites y procesos, la articulación efectiva entre las instituciones nacionales y locales y el acompañamiento de la autoridad minera en el proceso de legalización y formalización.

En este sentido, el proceso de legalización y formalización minera de los pequeños mineros a través de alguno de los mecanismos de formalización previstos por la normativa minera vigente requiere inexorablemente un instrumento ambiental de condiciones diferenciales bajo los términos del artículo 29 de la Ley 2250 de 2022, que oriente las acciones encaminadas a controlar y mitigar los efectos de la actividad minera ya consolidada en los territorios. Así, se hace necesario la expedición del presente instrumento normativo para coadyuvar en la garantía del acceso a la regularización de la pequeña minería, con base en las figuras legales existentes, propendiendo por una formalización

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	MADSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

basada en la dignificación de la vida y la práctica minera, la superación de los obstáculos que experimentan las poblaciones con vocación de regularización, la sustentabilidad ambiental y la sostenibilidad económica de sus operaciones.

Así las cosas, la formalización minera además de promover la actividad extractiva bajo el amparo de un título minero y una licencia ambiental garantizando la fiscalización, el seguimiento y control por parte de las autoridades, promueve y avala a través de la licencia ambiental temporal la recuperación de las afectaciones ambientales ejercidas previamente sin el lleno de los requisitos de ley y reduce el abandono de áreas sin recuperación y/o restauración en el área de actividad minera en proceso de formalización, la cual se define en el artículo 3º del instrumento normativo y se ilustra a continuación:


COMPARATIVA ÁREA PARA FORMALIZACIÓN ANM vs ÁREA LICENCIA AMBIENTAL TEMPORAL



Finalmente, señalar que el presente instrumento normativo adopta los Términos de Referencia actualizados para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, para la obtención de la licencia ambiental temporal en el marco de la formalización y legalización minera, atendiendo así lo establecido por la ley en cuanto a la diferenciación de requisitos para los pequeños mineros en proceso de formalización, teniendo en cuenta las características y limitaciones específicas de esta categoría de mineros, reconociendo entre otras condiciones, la escala de operación, el tipo de mineral y el método minero.

Los términos de referencia con enfoque diferenciado constituyen parte de los requisitos diferenciales para la solicitud, evaluación y otorgamiento de la Licencia Ambiental Temporal para la formalización minera, junto con el Manual de Evaluación del EIA para la Licencia Ambiental Temporal para la formalización minera, el Formulario Único Nacional – FUN para la solicitud de Licencia Ambiental Temporal para la formalización minera y el Formato de verificación preliminar de la documentación para la solicitud de la licencia ambiental temporal para la formalización minera, todo lo anterior en el marco de la diferencialidad requerida por la Ley 2250 de 2022.

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Sobre el particular, es preciso indicar que la diferencialidad en el marco del Plan Único de Formalización tiene un enfoque definido en la misma Ley 2250, el cual no implica la flexibilización de los estándares ambientales aplicables, toda vez que los mismos redundan en el derecho fundamental al ambiente sano. La diferencialidad se predica del sujeto más no de la actividad de explotación minera e involucra, entre otros, los siguientes aspectos: *enfoque diferenciado; simplificación de trámites y procesos; articulación efectiva entre las instituciones nacionales y locales; y acompañamiento de la autoridad minera en el proceso de legalización y formalización.*

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO

Las disposiciones contenidas en el instrumento normativo objeto de la presente memoria justificativa se aplican a las personas naturales o jurídicas, asociaciones o grupos de personas o comunidades o diferentes grupos asociativos de trabajo que desarrollan actividades de explotación de pequeña minería sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, ni Licencia Ambiental, que cuenten con acto administrativo en firme que certifique el proceso de formalización por parte de la autoridad minera, en los términos de la Ley 2250 de 2022.

El trámite administrativo ambiental que se establece en el presente instrumento normativo para evaluar y otorgar la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera, se aplicará por las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002 que tengan jurisdicción dentro del área de actividad minera en proceso de formalización, en los términos del artículo 29 de la Ley 2250 de 2022.


3. VIABILIDAD JURÍDICA

3.1. Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo

Las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la expedición del presente instrumento normativo emanan de las siguientes disposiciones legales:

- El numeral 2 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, que establece que le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otras funciones, regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural.
- El numeral 14 del artículo 5 ibidem, que asigna entre otras funciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la de “definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas”.
- El Artículo 1 del Decreto – Ley 3570 del 2011 que establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

- El numeral 18 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 14 del artículo 2 del Decreto-Ley 3570 de 2011, en concordancia con el artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, que establecen que las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, podrán declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reservas forestales nacionales.
- Parágrafo 1 del Artículo 29 de la Ley 2250 de 2022, donde se establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá un (1) año para reglamentar los requisitos diferenciales para la solicitud, evaluación y otorgamiento de la Licencia Ambiental Temporal para la Formalización Minera.
- Numeral 14 del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, establece que le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la función de declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de Reserva Forestal Nacionales.

3.2. Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada

Las normas que fundamentan la competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la expedición del presente acto administrativo se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano.

3.3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas

Se sustituye la Resolución 0448 del 20 de mayo de 2020 “por la cual se establecen los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requerido para el trámite de la licencia ambiental temporal para la formalización minera y, se toman otras determinaciones” y sus modificaciones 0669 del 19 de agosto de 2020 y 1081 del 15 de octubre de 2021.


3.4. Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción)

En el numeral 6º de la parte resolutive del auto de 29 de septiembre de 2022, el Consejo de Estado adicionó el numeral 5º del ordinal tercero de la sentencia de 4 de agosto de 2022, así:

ADICIONAR, por las razones expuestas en este proveído, el numeral 5º del ordinal tercero de la sentencia de 4 de agosto de 2022, el cual quedara así:

“5. ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, junto con las autoridades mineras y ambientales que estimen competentes, en el término de (1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, actualicen las guías minero-ambientales y los términos de referencia con el propósito de ajustarlos a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 1753 de 2015 (...).”

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

La orden contiene la obligación para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía de tres productos específicos: (i) guías minero ambientales actualizadas, (ii) Términos de Referencia actualizados, y el (iii) apéndice de determinantes ambientales por tipo de extracción.

Estos tres documentos deben cumplir con los objetivos del artículo 19 de la Ley 1753 del 2015, esto es, garantizar “la explotación racional de los recursos y apoyar a los mineros a formalizar.”

Finalmente, la sentencia C-339 de 2002 aclaró que las zonas de exclusión de la actividad minera no se limitaban a las áreas que integran los parques nacionales naturales, los parques naturales de carácter regional y a las zonas de reserva forestal, sino que pueden existir otras declaradas con anterioridad o que se declaren en el futuro por la autoridad ambiental. En tal sentido, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Estado en el citado fallo de ventanilla minera, es deber de la autoridad ambiental definir y declarar las zonas de especial importancia ambiental, ejercicio que promoverá el ordenamiento ambiental-minero del país, lo cual condicionará el otorgamiento de licencias ambientales temporales y definitivas también en el marco de los diversos programas de formalización y legalización minera.


3.5. Circunstancias jurídicas adicionales

De la Consulta Previa. – El derecho a la consulta previa se concibió como una garantía para la participación de los pueblos étnicos en todos aquellos asuntos que los afectan, porque están ligados a las determinaciones políticas o económicas sobre su destino y formas vida. El derecho humano a la participación y su modalidad de consulta previa tiene como objetivo proteger a los pueblos étnicos que suelen verse afectados por las actividades de las industrias extractivas en su territorio.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el tratado internacional que incorpora la consulta previa en el país. Fue ratificado por Colombia con la Ley 21 de 1991 —integrándose al bloque de constitucionalidad— y establece las bases necesarias para garantizar la consulta previa de las comunidades étnicas. Ha reforzado la autonomía de las comunidades en sus territorios, pues tienen el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones que las puede afectar directamente. Por último, la Directiva 10 del 2013 de la Presidencia de la República de Colombia, aclara el orden del procedimiento y las etapas de la consulta previa, y la Directiva 01 del 2010 especifica las acciones que requieren o no consulta previa.

Así, la consulta previa se desprende de que Colombia se constituye como una república democrática, participativa y pluralista (C.P. art. 1), que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural como un valor constitucional (C.P. arts. 7 y 70) y que las comunidades étnicas gozan de plenos derechos constitucionales fundamentales. Además la Constitución reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios (CP art. 330), por lo cual Colombia es un Estado multicultural y multiétnico, y la consulta previa es un instrumento y un derecho fundamental para amparar esos principios constitucionales. Por eso la Corte Constitucional ha establecido que “la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que puedan afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad (...) que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social.” Sentencia SU-039 de 1997 y SU-123 de 2018.

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Señalar, por último, que en caso de afectaciones ambientales, el derecho a la consulta previa tiene conexiones íntimas con la justicia ambiental, pues ante la perturbación ambiental de los pueblos indígenas y tribales, la Corte Constitucional ha activado la consulta previa para recomponer, a través de la participación, el reparto desigual de las cargas y los beneficios ambientales. Sentencia SU-123 de 2018.

De la sustracción en áreas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959. - La sustracción de un área de reserva forestal establecida mediante la Ley 2 de 1959, se entiende como la decisión administrativa a través de la cual la autoridad ambiental competente, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, deja sin efectos jurídicos el establecimiento de una porción de área delimitada como reserva forestal.

Particularmente para el tema minero, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, las zonas de reserva forestal son consideradas “zonas excluibles de la minería”, en las que no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras.

Considerando que en las áreas de reserva forestal de Ley 2 de 1959 se pueden presentar solicitudes de Licencia Ambiental Temporal para la Formalización Minera, en los eventos en que exista un concepto técnico final de viabilidad del estudio de impacto ambiental por parte de la autoridad ambiental competente para la licencia ambiental temporal, se deberá dar traslado por competencia en los términos del artículo 204 de la Ley 1450 de 2012 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin que esta Cartera expida el acto administrativo que decide la sustracción para el polígono objeto de la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera y a la Agencia Nacional de Minería. Este procedimiento se surtirá bajo el mismo procedimiento de solicitud de Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera de la Ley 2250 de 2022.

Esta sustracción de áreas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959 contará con medidas compensación, las que deberán ser incluidas en el acto que otorga la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera, medidas estas que deberán ser asumidas por el solicitante titular de la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera.


Las medidas de compensación por efectos de la sustracción serán establecidas por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y serán incluidas en los instrumentos de manejo y control de la licencia ambiental temporal para la formalización minera, corresponde a la Autoridad Ambiental competente el control y vigilancia.

De la Consulta Pública a la presente Iniciativa: El proyecto normativo será dispuesto en la Pagina Web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para consulta publica Nacional por el **término de 15 días calendario**.

4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere)

El proyecto normativo propuesto prevé un impacto normativo positivo para:

- a. El usuario minero, quien verá disminuidos los costos de elaboración de los estudios ambientales requeridos para la solicitud de la licencia ambiental temporal, toda vez que la diferencialidad requerida por el legislador se

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

ve reflejada en requerimientos de información de línea base precisos y acordes con el alcance del instrumento ambiental. De otro lado, se hace entrega de una herramienta en Excel que permite al minero, a partir del método minero utilizado y el mineral explotado, pueda identificar y evaluar los impactos ambientales presentes en el área de la actividad minera objeto de formalización, facilitando de esta manera el ejercicio central del estudio ambiental.

- b. La autoridad ambiental, en la medida que se pone a su disposición el Manual de Evaluación del estudio de impacto ambiental acompañado de una herramienta de evaluación específica para la Licencia Ambiental Temporal, que le permitirá dar cumplimiento a los plazos establecidos por la ley y además trabajar con criterios de evaluación objetivos y precisos evitando desviaciones de los términos de referencia, situación que se verá reflejada en la reducción de tiempos de evaluación y agilidad en el proceso interno de evaluación y otorgamiento del instrumento ambiental.
- c. La sociedad en general quien se beneficia con la formalización y legalización de una actividad económica que se ejercía fuera de la legalidad, sin control alguno, y que a partir de la Ley 2250 de 2022 se abre una ruta viable y actual que impacte positivamente la minería nacional.

En conclusión, la expedición del presente instrumento normativo, como se enmarca en una política nacional para incentivar la formalización y la legalización minera en el país, no conlleva para los obligados impactos económicos nuevos ni significativamente distintos a los que actualmente se derivan de la solicitud, evaluación y otorgamiento de las licencias ambientales para las actividades de explotación minera.

Asimismo, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales urbanas, no requieren de cambios mayores en su estructura organizacional para el cumplimiento de las disposiciones del presente proyecto normativo; no obstante, si requieren fortalecer sus capacidades para llevar a cabo un mejor control y seguimiento a los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales del plan de manejo ambiental frente a la operación, desmantelamiento, abandono y/o terminación de la actividad minera objeto de formalización, así como a las prácticas de operación y cierre necesarias para mitigar, corregir y compensar las afectaciones ambientales derivadas del ejercicio de la actividad minera que favorezcan la regeneración, rehabilitación y/o restauración de los territorios intervenidos, impuestas bajo la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera.


5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere)

Se considera que el instrumento normativo que se presenta no requiere apropiaciones presupuestales o disposición de nuevos recursos para el ejercicio de otorgamiento de la Licencia Ambiental Temporal en el marco del Plan Único de Legalización y Formalización Minera, así como tampoco para el control y seguimiento de esta.

6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se requiere)

El proyecto de resolución propuesto genera un impacto positivo ambiental en la medida que una reglamentación diferencial contribuye con la celeridad de la solicitud, evaluación y otorgamiento de la Licencia Ambiental Temporal

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

para el proceso de formalización minera en el país. Este instrumento ambiental permitirá no solo, la caracterización de la actividad minera que se ha venido realizando sin el lleno de los requisitos mineros ni ambientales y sus implicaciones ambientales en el territorio, sino también el seguimiento y control efectivo de dicha actividad extractiva por parte de las autoridades ambientales, durante la vigencia del instrumento ambiental.

En este sentido, y con el lleno de los requisitos ambientales, se prevé que los impactos ambientales ocasionados por efecto de la actividad minera ilegal sean subsanados a partir de las acciones de mitigación y control impuestas en el instrumento ambiental de carácter temporal y así mismo, minimizar el abandono de áreas afectadas por minería, beneficiando así los ecosistemas y a las comunidades que habitan las áreas de actividad minera en proceso de formalización.

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO

Se adjunta documento técnico de soporte.


ANEXOS:

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación en la agenda regulatoria (Firmada por el servidor público competente –entidad originadora)	
Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de conformidad)	No aplica
Informe de observaciones y respuestas (Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y grupos de interés sobre el proyecto normativo)	
Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los mercados)	No aplica
Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite)	A tramitarse posterior a la consulta pública nacional
Otro Documento Preliminar de Soporte Técnico	X

Aprobó:

ALICIA ANDREA BAQUERO ORTEGÓN
Jefe Oficina Jurídica Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

SANDRA PATRICIA MONTOYA

Directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana – Área Técnica Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

ADRIANA RIVERA BRUSATIN

Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – Área Técnica Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.